

EDITORIAL

Con el presente número el BOLETIN DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES inicia su VIII año consecutivo, publicando algunos frutos del trabajo académico de ambos departamentos de la UCA, así como otras colaboraciones de especial interés. La primera publicación del año 1985 nos fuerza a plantear la artificial coyuntura del paso de un año al siguiente, analizando lo que el anterior nos deja, a nivel nacional, y cuáles son los retos más inmediatos con los que se enfrenta la sociedad en el año que se inicia, para planificar la tarea que deberá emprender nuestra publicación durante 1985.

En una mirada retrospectiva y de conjunto, el año 1984 deja al país sumido en una profunda crisis, con escasos horizontes de solución. De todos los aspectos de esta crisis, el de mayor profundidad y el más grave, que en cierto modo incide y condiciona todos los demás, nos encontramos con la guerra civil, ya prolongada por muchos años, que no sólo se mantiene en toda su intensidad, sino que se extiende e intensifica progresivamente. Aunque las víctimas de la represión política directa y de los escuadrones de la muerte hayan disminuído algo en número respecto a años pasados, han aumentado las víctimas de la guerra como consecuencia de su intensificación y cambio de estrategia. Solamente en la población civil se han producido más de tres mil muertos, a los que habrá que añadir los que sucumbieron en operativos militares y acciones de contrainsurgencia de los que no se tienen datos precisos. Pero si se toman en cuenta los caídos en combate de ambos bandos, la cifra de muertos se elevaría a más de cinco mil; y considerando las bajas de ambos bandos, los muertos y los capturados de la población civil también por ambos bandos, la cifra se remonta a nueve mil personas que sufrieron directamente las consecuencias peores de la guerra. Por lo que respecta a la destrucción, las cifras contabilizadas ascienden a cientos de millones de colones, a lo que hay que sumar la destrucción causada por los bombardeos y operativos de la institución armada, dotada de alta capacidad de fuego y que consume una parte muy considerable del presupuesto nacional, aparte de la ayuda militar suministrada por el gobierno de los Estados Unidos.

Un segundo aspecto de la crisis que nos deja el año recién pasado es la profunda crisis derivada de la guerra, y que se manifiesta en todos los sentidos de la realidad nacional. Si se admitiera la cifra oficial de un incre-

mento del 1.5% en el PIB, el dato sería relativo, respecto al año anterior en el que el declive se había mantenido por cuarto año consecutivo; e incluso el incremento en parte se debe a flujo mayor de ayuda internacional, mucha de ella en forma de préstamos, que aumenta la deuda externa e hipoteca el futuro del país. Sin embargo, el índice de incremento en el costo de la vida se mantuvo entre un 25 y un 50%, la moneda se ha seguido devaluando realmente al pasar al mercado paralelo una lista creciente de productos, las divisas han escaseado, y la producción básica del país se ha seguido deteriorando en los rubros más importantes. La crisis política, por su lado, no se ha resuelto ni siquiera al nivel de las fuerzas legalmente reconocidas. La transición a un régimen de elección popular y el ascenso de la Democracia Cristiana —novedad importante en los últimos cincuenta años— no ha supuesto un nuevo pacto social a nivel nacional, ni entre los partidos reconocidos oficialmente ni, mucho menos, con relación a las fuerzas políticas insurgentes. La crisis social, en fin, se manifiesta en la depauperación de las mayorías, que tímidamente afloró durante la segunda parte del año en múltiples reivindicaciones gremiales; pero sobre todo en la situación de más de medio millón de desplazados internos del país, cifra que aumentó durante el año, que viven en condiciones de marginalidad e infra-subsistencia, aceptando estoicamente su destino y perdiendo la esperanza de una solución a corto plazo. La aparente apertura de la Democracia Cristiana a buscar soluciones con algún componente social se ve restringida por la oposición de otras fuerzas sociales y del mismo aparato estatal con las que se ve obligada a pactar para consolidarse o mantenerse en el poder.

Mientras tanto, la nueva Ley Electoral da la oportunidad de evidenciar la polarización de las fuerzas políticas reconocidas, que se concretizará en una dura lucha entre los poderes u órganos del estado, y que se resolverá con el debilitamiento del ejecutivo, ya presionado por el voto mayoritario de los partidos de "oposición" que habían logrado controlar otros organismos importantes del aparato estatal, principalmente, para este caso, la Corte Suprema de Justicia. Igualmente, la aprobación del presupuesto nacional para 1985 mostrará la decisión de la mayoría parlamentaria de no dar ninguna facilidad al ejecutivo en el desempeño de su cargo, regateándole los fondos que juzga necesarios para sus funciones. Frente a una crisis del país como la ya indicada, estas pugnas internas por cosas accidentales y secundarias, así como la campaña iniciada para las próximas elecciones, manifiestan la crisis más profunda nacional y el divorcio entre la política partidista y los problemas fundamentales de El Salvador.

Asimismo, el año 1984 vio florecer la esperanza de una solución alternativa a la guerra. Las reiteradas propuestas y presiones por el diálogo, frente a la cerrada oposición al mismo de parte de sectores importantes, pudo conjugarse al fin en la oferta solemne de Duarte expresada en la Asamblea General de las Naciones Unidas, para lograr un primer encuentro esperanzador para el pueblo en la localidad de La Palma. Sin embargo, la segunda ronda de conversaciones se vio enfrentada a una fuerte oposición interna que casi la hace abortar; el desarrollo de la misma se

convirtió en la antítesis de la euforia de La Palma, y las declaraciones posteriores, de ambas partes, mostraron las profundas diferencias y la radical dificultad de encontrar un camino de entendimiento y solución pacífica.

Por último, la reelección de Reagan como Presidente de los Estados Unidos, y por una mayoría tan abrumadora, dejaba en pie la política exterior norteamericana para el área, y concretamente la solución militar para El Salvador, que sólo podrá ser contrapesada con moderada oposición en el Congreso, más la forma y en la cantidad de ayuda solicitada que en la línea estratégica fundamental.

La predicción de Orwell para 1984 no se ha cumplido en todo su rigor, pero el mundo se ha tenido que enfrentar a una realidad social que ciertamente no es la anhelada por las mayorías ni la predicada en los foros internacionales.

El Salvador se enfrenta al año 1985 con una serie de retos y problemas, sustancialmente los mismos que los del año anterior y los precedentes, dado que las condiciones objetivas no han cambiado, o no han cambiado lo suficiente, y dado que la guerra, como factor principal, continúa con todo rigor y en escalada de mayor intensificación.

La guerra, en efecto, continuará, y a un ritmo creciente. Así lo confirma la cuota asignada al presupuesto nacional, que para ese rubro concentra casi el 40%. Así lo confirma el incremento de la ayuda militar norteamericana solicitada y en parte aprobada ya por el Congreso. Así lo confirma el incremento de las FF.AA., su mayor capacitación y entrenamiento, su reestructuración y la creación de nuevos batallones y centros de formación castrense. Así lo confirma la modernización del equipo bélico adquirido, especialmente para la fuerza aérea. Así lo confirma la estrategia desarrollada en los dos primeros meses del año, por medio de operativos continuos y permanentes en las zonas conflictivas del país; lo mismo que la elevación cuantitativa de acciones de sabotaje y de ataques en grupos pequeños pero multiplicados de parte del FMLN en gran parte del territorio nacional. Las consecuencias de la guerra para 1985, de seguir el ritmo de los dos primeros meses, podrán fácilmente superar a las del año anterior, en cuanto al número de víctimas, en cuanto a la magnitud de la destrucción del país, y en cuanto al incremento de los desplazados y refugiados por causa de la violencia.

La economía del país, por más augurios optimistas que se formulen, tiene que sufrir las consecuencias de la intensificación de la guerra y mantenerse en una situación de letargo o de recesión. El sabotaje y la destrucción de ambos bandos, por un lado, se deberán reflejar en los índices económicos. La reconstrucción del país no puede empezar antes de la finalización del conflicto. La reactivación económica, aunque afluyan dólares en mayor medida, es inverosímil en una nación con guerra civil, aunque la zona metropolitana y una parte relativamente tranquila del centro y del occidente puedan ser inconscientes de la tragedia nacional y dar apariencias de cierta prosperidad. Pero la misma concentración galopante de desplazados en esas zonas agrava el problema del empleo y de la adquisición de los

mínimos indispensables para la vida humana, incrementando la marginalidad y las consecuencias que de ella se derivan.

El año 1985 se aboca de entrada a un proceso electoral secundario —pero no por ello carente de importancia en la recomposición de fuerzas sociales y políticas, con posibles consecuencias para soluciones alternativas al conflicto, para renovar la Asamblea Legislativa y las administraciones locales por medio del voto directo. En un país presidencialista, como El Salvador, estas elecciones siempre han ocupado un papel secundario —que en la presente coyuntura se puede haber remarcado por la escasez de recursos económicos para la campaña, o por una actitud norteamericana de preferencia por una compensación de poderes y el consiguiente equilibrio "democrático" en los órganos supremos del estado—. La presente campaña, el menor entusiasmo del pueblo, lo confirman; se centra más la propaganda en figuras "presidenciables" y en líderes de partidos, que en programas; en la necesidad de respaldo legislativo a las políticas del ejecutivo, o en la amenaza de concentración de poderes, calificada de "dictadura". La lucha política refleja más las rivalidades personales y grupales, los peligros de la concentración o de la dispersión de poderes, que el cuestionamiento de fondo a los programas y a los problemas. Mientras el país se debate entre la vida y la muerte, la supervivencia o su desaparición, esos temas y los planteamientos fundamentales están ausentes del litigio por la ocupación de cargos secundarios o la conformación de frentes políticos mayoritarios.

Finalmente, el fracaso, al menos temporal, del diálogo entre el gobierno y los insurgentes; el fracaso —confiamos en que también sea temporal— del proceso de paz impulsado por el Grupo de Contadora; el endurecimiento de la política exterior norteamericana para la región; no nos permiten ser precisamente optimistas. La solución militar, con todas las consecuencias de que somos víctimas —en menor grado, ciertamente, que las mayorías desposeídas— no es únicamente un presagio, sino que es una realidad que se nos impone, contra todos los idealismos voluntaristas.

Frente a tal realidad, experimentada y prevista con fundamento, el BOLETIN DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES se propone dar algún aporte al estudio de la problemática nacional y ensayar vías de solución. Ofreceremos algunos trabajos de planteamientos y discusiones teóricas que iluminen desde esa perspectiva la reflexión y el análisis. Otros estudios estarán dirigidos a investigar las causas de la crisis y problemática nacionales. Otros, a profundizar en la realidad presente. Otros, en fin, a buscar soluciones para la crisis y la tragedia nacionales.

Poco es lo que una publicación de este género puede aportar a la solución de los graves problemas que afligen al país. Poco es lo que los intelectuales pueden incidir en el curso del proceso, desde su trabajo académico. La realidad se mueve por otros caminos. Las fuerzas sociales decisorias no están en la universidad. Pero no podemos renunciar al compromiso con nuestro país, ni dejar de aportar nuestra colaboración, por mínima que sea, para construir una sociedad más humana.